

Orden y conflicto: reestructuración neoliberal y respuestas colectivas de los sectores populares urbanos en Chile y Argentina.

Retamozo, Martín y Jaime Garrido.

Cita:

Retamozo, Martín y Jaime Garrido (2010). *Orden y conflicto: reestructuración neoliberal y respuestas colectivas de los sectores populares urbanos en Chile y Argentina*. LIDER - Revista Labor Interdisciplinaria de Desarrollo Regional, 17 (12), 95-117.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/martin.retamozo/54>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/psap/fgV>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Orden y conflicto: reestructuración neoliberal y respuestas colectivas de los sectores populares urbanos en Chile y Argentina

Martín Retamozo¹

Jaime Garrido²

Recibido: agosto, 2010; Aceptado: septiembre, 2010

RESUMEN

El propósito de este artículo es analizar la relación entre la introducción de las reformas neoliberales y las respuestas colectivas de los sectores populares urbanos en Chile y Argentina. Para ello, por un lado, se centra la mirada en aspectos clave de las transformaciones neoliberales, en particular las que operaron en la esfera del Estado y en el ámbito del trabajo. Por otro, se presentan las expresiones elaboradas por sectores subalternos en términos de las consecuencias de desigualdad social que el nuevo modelo genera. El artículo presenta una perspectiva comparada de dos países del Cono Sur, Argentina y Chile, en los cuales es notable la profundidad y ortodoxia que allí alcanzaron las reformas. En este sentido, la propuesta es establecer determinadas coincidencias en el nivel de los cambios a la sociabilidad subalterna en ambos países para poder

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the relationship between the introduction of neo-liberal reforms and the collective answers of urban popular sectors in Chile and Argentina. For one hand, it focuses on key aspects of the neo-liberal transformations, in particular those who operated on the State's sphere and in the labor context. For the other hand, the social expressions elaborated by subordinate sectors in terms of social inequality outcomes generated by the new model are presented. This article introduces a comparative perspective between Argentina and Chile, which show a remarkable practice of the aforementioned reforms. In this sense, our proposal is to establish some coincidences in matters of the changes within the secondary sociability in both countries in order to analyze the differences in the

¹ Filósofo y Magister en Ciencia Sociales por la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO (DF-México). Profesor del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Socio-Históricas. Sus líneas de investigación que ha seguido contemplan la subjetividad, sujetos y movimientos sociales, populismo y movimientos populares y epistemología de las ciencias sociales. Dirección Postal: Calle 48 entre 6 y 7. 8vo piso, of. 811-813, La Plata - Argentina - CP 1900. Fono: 54 -221- 155114686 / ✉ martin.retamozo@gmail.com

² Sociólogo por la Universidad de la Frontera (Temuco-Chile), Magister en Urbanismo por la Universidad Autónoma de México (DF-México) y Doctor © en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (DF-México). Profesor tiempo completo en la Carrera de Sociología de la Universidad de La Frontera. Sus líneas de investigación e intereses se relacionan con movimientos sociales, participación ciudadana y políticas sociales. Dirección Postal. Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco, Chile. Fono: 56-45-/592166/325000/ ✉ jjgarr@gmail.com

analizar las diferencias en la construcción de respuestas colectivas por parte de los sectores populares.

Palabras claves: movimientos sociales, Chile, Argentina, acción colectiva, sectores populares

construction of collective responses made by the popular sectors.

Key words: social movements, Chile, Argentina, collective action, popular sectors

1. Introducción

El orden social de América Latina se ha visto drásticamente reconfigurado por la introducción de reformas pertinentes a una nueva fase de acumulación capitalista que se ha insistido en denominar neoliberal. Dichas transformaciones han afectado cualitativamente a las sociedades en cuestión, redefiniendo por ejemplo, las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil, alterando profundamente las formas de sociabilidad, los niveles de pertenencia y movilidad social, entre otros aspectos relevantes³. En estas alteraciones tiene importancia crucial el haber trastocado el régimen económico⁴, socavando el dominio del Estado nacional popular ligado al Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, que fue el marco político hegemónico en el cual se configuraron las relaciones sociales en la región por más de cuarenta años.

En este contexto dirigimos la mirada específicamente a dos países del cono sur, Chile y Argentina, por la profundidad y ortodoxia con que se aplicaron las reformas y por el disciplinamiento que asumieron frente a los dictados de los organismos multinacionales. Esto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta, en contraste, que en la fase nacional, popular estadocéntrica ambos países presentaron características particulares para la región en lo que respecta tanto al alcance del Estado social, como la existencia de importantes experiencias subalternas que favorecieron la presencia de fuertes organizaciones obreras con un profundo anclaje en lo social, con vocación y efectividad en la disputa de las relaciones de poder y distribución de los recursos.

Ahora bien, en los contextos signados por el neoliberalismo las condiciones de emergencia de experiencias subalternas se reconfiguran, por lo tanto es relevante indagar tanto en cómo las transformaciones afectaron la capacidad de respuesta de estos sectores, como examinar la construcción de respuestas colectivas de los sectores populares en ambos países. Estos dos ejes nos servirán de plataforma para elaborar una mirada sobre los procesos histórico-políticos propios de los países y que involucran a los sectores populares. El objetivo principal es reconstruir en perspectiva histórica los alcances y limitaciones de las experiencias de organización subalternas contemporáneas como respuestas a (y en) las nuevas condiciones instauradas por el orden hegemónico en los países citados.

Con este propósito proponemos una reconstrucción breve de los principales elementos que caracterizan la implementación del modelo neoliberal en la región, sus orígenes, sus principales objetivos y las consecuencias más relevantes. Luego analizamos la introducción de las reformas neoliberales en ambos países, su evolución cronológica, los procesos políticos implicados y las consecuencias o impactos en los ejes centrales que hemos mencionado, el Estado y la esfera del trabajo, para detenernos en la configuración de la subjetividad en los sectores populares. Enseguida presentamos

³ Estas afectaciones tienen formas y efectos diferentes entre las distintas clases sociales. En este artículo nos centramos en las consecuencias y las respuestas de los sectores populares.

⁴ Con esto no sostenemos que el neoliberalismo se agote en lo económico. En tanto orden de dominación contempla reconfiguraciones políticas, sociales y culturales específicas dignas de mención.

las respuestas colectivas que se pueden desprender de la observación de la situación chilena (reivindicaciones de los pobladores) y las que han sucedido en Argentina (la experiencia de los piqueteros), para, finalmente, proponer algunas conclusiones que pretenden establecer coincidencias en el nivel de los cambios de la sociabilidad subalterna en ambos países para poder analizar los patrones en torno a los cuales se ha inscrito la acción colectiva en cada país.

2. Contexto General: los tiempos neoliberales

Las transformaciones operadas en las últimas décadas han afectado a América Latina en diversos ámbitos de la vida social, por ejemplo, en el espacio de la organización económica y en la relación que el Estado establece con sus representados, recreando nuevas formas de sociabilidad, a la vez que erosionado las maneras tradicionales en las cuales se inscribía la constitución de identidad y formación de sujetos sociales. Este reordenamiento social se produjo en la región a partir de una doble transición simultánea inscrita en el régimen político y en el orden económico. Es así que hoy la mayoría de los países en América Latina han dejado atrás los regímenes autoritarios y han apuesto en funcionamiento el dispositivo institucional de la democracia representativa⁵. La segunda transición a la que se alude se vincula a la reestructuración económica. Es decir, la adopción de medidas tendientes a privilegiar el libre mercado como mecanismo de coordinación social, conocidas también como neoliberalismo. Básicamente, a las implicancias de este segundo proceso, son a las cuales se aboca este trabajo, aunque evidentemente el grado de implementación y profundización varía en cada uno de los países y la relación con la primera es también relevante.

El marco de referencia global en los cuales se inscriben estos cambios de América Latina se dan, por una parte, en el contexto de la instauración de un sistema de reproducción social distinto al que hegemónicamente funcionó en la mayor parte del mundo durante más de cuarenta años. Por otro lado, tenemos el descrédito y fracaso de las diversas alternativas al capitalismo que se ensayaron en el siglo XX, de las utopías que predecían y prometían un cambio hacia la construcción de sociedades igualitarias. Es decir, el escenario de la década del noventa hasta hoy ha estado marcado por la hegemonía de un patrón ideológico y de acumulación de la riqueza específico, que se impuso como la única forma válida y posible para pensar, interpretar y organizar la sociedad.

Estas transformaciones que reconocen un origen en las crisis del modelo anterior hacia finales de la década del setenta, pueden resumirse en: reestructuración en las funciones del Estado, apertura externa a las nuevas formas de competencia global, desregulación del mercado, privatizaciones y liberalización comercial, reorganización

⁵ Vale decir escogen a sus representantes en procesos de elección popular medianamente transparentes y justos (Oxhorn, 2001^a) Otra cosa es el tipo de democracia que se propone y la calidad de los regímenes que se instauran y su vinculación con la justicia y el bienestar social, pero discutir ese punto no es el objetivo del presente trabajo.

espacial de la producción, y flexibilización laboral. Todo esto, poniendo como agente principal de la actividad productiva al sector privado. Uno de los elementos centrales es el lugar que se le asigna al mercado como el más eficiente y mejor mecanismo de asignación de recursos, lo que se traduce en la reconfiguración del papel del Estado, principalmente en lo referido a su rol como empresa y a su responsabilidad social, (se debilitan o privatizan las instituciones de seguridad social). Lo que acompaña a estas transformaciones, es el desmantelamiento del modelo de Estado Nacional Popular (Garretón, 2001), algo clave, ya que en los países como Argentina y Chile la reconversión del Estado afectó profundamente las formas de sociabilidad que se habían gestado en el modelo anterior.

El Estado Nacional Popular estaba fuertemente asociado al modelo de Industrialización por Sustitución de importaciones, y articuló una matriz estadocéntrica (Cavarozzi, 1996) que consistía en la fusión entre el Estado, los partidos políticos y los actores sociales. La imbricación, entre sus distintos elementos produjo situaciones de subordinación y pérdida de autonomía de alguno de los componentes (como los actores sociales), aunque también ofreció lugares para una lucha por la distribución de los recursos. Es decir, más allá de los problemático que pudo haber sido este modo de vinculación para la autonomía de determinados actores, el modelo propició un espacio clave para la expansión y la promoción de la ciudadanía, puesto que ayudó asegurar la incorporación de vastos sectores que se encontraban excluidos a través del mejoramiento de sus niveles de bienestar y una apertura a su participación social y política. En efecto, este “Estado de Compromiso” (Barrera, 1999) reflejaba un equilibrio entre las clases sociales bajo un modelo económico en el cual el Estado jugaba un rol central en la economía e intentaba la incorporación de los sectores populares en ella.

Ahora bien, las reformas neoliberales cambian dramáticamente esta relación, el Estado ya no asume el compromiso de la incorporación y el reaseguro del bienestar de sus habitantes, ésta es una tarea individual⁶. Este giro en la función del Estado es acompañado por las reformas que lo despojan de los instrumentos que le permitían injerencia en la economía, con el argumento de que tales intervenciones restan eficiencia al mercado, el cual en el nuevo esquema emerge como el agente decisorio privilegiado, reduciendo el papel del Estado a un ámbito subsidiario o compensatorio⁷. Este viraje mercantil trae como consecuencia la redefinición de las formas tradicionales de integración (como el mundo del trabajo), de solidaridad y de cohesión social (Wormald y Sabatini, 2003), y por consiguiente la modificación de los comportamientos sociales.

⁶ Esta reconversión del Estado, al transformar los espacios de intermediación, afecta de manera más profunda a los sectores populares.

⁷ No obstante, a nuestro juicio esto no se traduce en un adelgazamiento de las funciones del Estado, más allá que en términos ese haya sido el planteamiento, lo que ha ocurrido más bien, es una resignificación de las funciones del mismo. Así, el nuevo lugar del Estado se orienta a consolidar la estrategia de acumulación basada en el libre mercado y redefine la relación estatal con los sectores populares. A su vez, se estructuran nuevas pautas de acción y relaciones de estos sectores con los partidos políticos y, también con el Estado. Por ello, podemos decir con Shild (1998), que el Estado se encuentra en el centro del presente proyecto de modernización llamado neoliberal.

3. La situación Chilena

En el caso de Chile, la implantación de políticas neoliberales ocurre tempranamente y corresponde a una de las tareas con carácter refundacional que asumió la dictadura de Pinochet (1973-1990). Su primera medida consistió en una operación represiva para luego avanzar en las líneas que sentaran las bases de un nuevo ordenamiento social: una nueva Constitución y un nuevo régimen económico. Frente a este último proceso, Wormald y Sabatini (2003) nos ofrecen un ilustrativo esquema que distingue tres etapas en la consolidación del neoliberalismo. La primera de ellas ocurre, entre los años de 1973 a 1985. El punto de partida es el “Plan de Reconstrucción Económica” de 1975, el cual cambió el rumbo de la economía y redefinió el papel del Estado, a través de la apertura de la economía al exterior, la reducción del gasto fiscal y los impuestos, y la privatización de la mayor parte de las empresas estatales⁸ e, incluso, los sistema de seguridad social, además de que se introdujo la lógica de mercado en áreas prioritarias como la educación y la salud.

Una de las consecuencias visibles de este proceso fue la drástica transformación del mundo del trabajo, dónde el Plan fomentó la flexibilización de los mercados laborales. Esta medida tenía un doble objetivo convergente: por un lado, desarticular el tejido social como una forma de reducir la presión redistributiva de los trabajadores, y por otro mantener un marco de regulación laboral más flexible como condición necesaria para enfrentar las nuevas formas de competencia y acumulación dentro de la economía global. Esto produjo una severa disminución del empleo, así en 1983 había 150 mil empleos públicos menos junto a una reducción en casi 100 mil obreros (Díaz, 1991), lo que a su vez condujo a un debilitamiento de las formas tradicionales de organización y representación de los trabajadores, a la par de la pérdida de poder en la negociación (Wormald y Sabatini 2003).

La segunda etapa ocurre entre 1984-1997. Este es el periodo de consolidación del modelo, después de una profunda crisis económica en 1982, donde se tomaron medidas para atraer inversión externa que permitiera expandir y diversificar el sector exportador, las cuales lograron su propósito. Entre 1986 y 1990 las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 10,4%, aunque a principios de los noventa esta tasa disminuyó levemente, alcanzando un ritmo promedio de 9,8%, para volver a crecer a una tasa de 11,3% entre 1996 y 1998. El aumento en las exportaciones, se tradujo en una disminución del desempleo y en un aumento real de los salarios, gracias a que éstas pudieron extenderse al sector manufacturero, — tomemos como dato que la reestructuración había implicado la quiebra y cierre de muchas industrias y empresas en diferentes rubros —. Sin embargo, hay que subrayar que el grueso de éstas, hasta hoy, se relaciona con la explotación de recursos naturales. Tomando distancia del aumento de las exportaciones como síntoma de la recuperación, Díaz (1991) señala, que el crecimiento que experimenta la economía en el periodo también tiene que ver con la expansión de la pequeña y mediana empresa, con lo cual se evidencia un doble proceso en el

⁸ De 529 empresas estatales en 1973 hacia 1990 se mantenían sólo 41.

empresariado chileno: reconstitución de grupos locales y entrada de grupos extranjeros, ambos fortalecidos por las privatizaciones de las empresas del Estado.

En cuanto a los salarios, se produjo una recuperación hacia 1988 que contrasta con un proceso de reestructuración que sólo registraba caída en las remuneraciones (Barrera, 2001). Lo más elocuente de la recuperación, se puede observar en las cifras del desempleo. En 1982 existían 1,2 millones de personas desempleadas y adscritas a los Programas de Empleo de Emergencia, a comienzos de la democracia en 1990, esta cifra se había reducido a menos de 300 mil personas. No obstante, dichas cifras ocultarían que el desempleo abierto ha sido sustituido por un empleo precario, mal pagado, desprotegido, bajo relaciones laborales autoritarias y altos niveles de explotación que tiende reproducir desigualdad incluso en sectores asalariados (Díaz, 1991: 89)

Finalmente la tercera etapa, desde 1998 hasta hoy, ha estado marcada por reducción del ritmo de crecimiento, el producto interno bruto (PIB) cayó a 3.2% en 1998 y a -1% en 1999, siete puntos por debajo del crecimiento promedio alcanzado durante los 10 años anteriores. Por consiguiente se ha producido un aumento en los niveles de desempleo, que subió de 6.1 % en 1998 a 8.3% en 1999, en el año 2000 este llegó al 10% de la fuerza de trabajo, pero dentro de los sectores más pobres, el desempleo era para ese mismo año de 25.8%. A pesar de que se registraron tasas de crecimiento promedio del 2.7% entre el año 2000 y el año 2004, la tasa de desempleo promedio ha permanecido relativamente alta, cayendo solamente en 1.4 % y con un promedio para estos cuatro años del 9.1% (Cowan, 2004).

Al evaluar las consecuencias del ajuste, puede observarse que los principales efectos negativos se vinculan con la ciudadanía social, a razón del desplazamiento del Estado. Por ejemplo, la creación de sistemas privados de pensiones y de salud, implican déficit que se traducen en vulnerabilidad y renovadas formas de segmentación social. También se puede mencionar en este plano el rediseño de la intervención pública en materia social, que ha estado cumpliendo un papel de desactivación política y disciplinamiento de la sociedad. El objetivo esencial de racionalizar y efectivizar el gasto a través de una vinculación técnica e individual, desalienta la cooperación, poniendo como destinatarios sólo a lo más pobres. Con esto, se disocia el sistema político de las demandas de diferentes sectores sociales, y se transmite la señal que las necesidades deben ser resueltas a través de la participación en el mercado. Esta situación afecta la subjetividad, pues le niega que sea producto y expresión de sus relaciones y situaciones sociales (Díaz, 1998), además genera apatía, ya que los esfuerzos y energías se dirigen a participar en el mercado y la gente tiene menos tiempo y perciben menos la necesidad de volverse políticamente activos (Oxhorn, 2001^a).

Por su parte, las consecuencias en la esfera laboral tienen que ver en mayor medida con la precarización del empleo, y no con su ausencia. La precarización se puede entender como mayor inestabilidad laboral y la ausencia de derechos que resguarden intereses particulares y colectivos, lo que redundaría en vulnerabilidad e incertidumbre (Wormald, Cereceda y Ugalde, 2002).

En síntesis, la reestructuración neoliberal, ha cambiado las dinámicas de movilidad y las estructuras de oportunidad de vida de los diferentes grupos sociales y su percepción sobre la situación. En el caso de Chile podría pensarse, que este cambio

de rumbo que ha experimentado el modelo de desarrollo económico ha tenido un giro positivo hacia los sectores populares (sobre todo, si tomamos en cuenta las cifras oficiales de paulatina disminución de la pobreza⁹). No obstante, hay dos elementos que se deben considerar. El primero, está directamente vinculado al manejo económico, y se refiere a la persistente desigualdad social. Por un lado los niveles de pobreza, de acuerdo a determinados indicadores, tenderían a bajar, no obstante la distribución del ingreso permanece prácticamente inalterable (Meller, 1999), por ello, se nos dice (De la Maza, 2004) es importante diferenciar con claridad la evolución de la pobreza con respecto a la desigualdad, campo en el cual no hay avances sino más bien retrocesos. Según datos del PNUD (2004) la diferencia entre el 20% más rico con respecto al 20% más pobre es de 7,6 veces, colocándonos entre los más altos de la región. El segundo elemento a considerar, releva una disposición subjetiva al interior de la sociedad, y que el Informe del PNUD del año 1998, condensa como la Paradoja de la Modernización. Los éxitos del desarrollo económico corren disociados a la percepción subjetiva, la cual está dominada por una sensación de “latente malestar”, hay una desconexión entre la vida cotidiana y los indicadores del modelo y el funcionamiento de la democracia. El Informe constató que la gente no estaba contenta con el rumbo económico del país, lo que es una clara discordancia con los indicadores. Esta asincronía, se originaba por una alta percepción de inseguridad, la cual se explica en tres planos; el miedo al otro, (incluyendo a los propios vecinos), el miedo a la exclusión social y económica¹⁰, y la última impresión, es que “las cosas estaban fuera de control”, proveniente de percepciones sobre el desorden urbano, las drogas y la “experiencia difusa de caos”.

A nuestro juicio, el malestar devela las enormes carencias de un proceso. El sistema económico neoliberal ha provocado individualismo y pérdida de sentido de la solidaridad, a su vez este fenómeno conspira contra las dinámicas de integración y demanda de las organizaciones populares. Este proceso de reconfiguración microsocial se traduce en un ámbito más general en la desafección política y disconformidad con el sistema democrático.

Esto último, dado que la instalación del régimen democrático estuvo dada por la estabilización de los marcos institucionales prefijados por el autoritarismo y por el modelo económico neoliberal, lo que obliga a subordinar el proceso de democratización a las exigencias y ritmos de esos esquemas, imponiéndose un discurso político hegemónico, por sobre las esperanzas de la gente. Por lo tanto, la consolidación de la institucionalidad democrática en estos años, ha estado cruzada por la importancia asignada a la lógica del consenso, la cual deviene en una serie de consecuencias para el

⁹ Según las mediciones de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica, en 1990 el 38% de la población total correspondiente a 5,2 millones de personas estaba bajo la línea de la pobreza, a fines del año 2003 esa situación baja a un 18,8%, correspondiente a 2.907.700 personas, de las cuales un 4,7% son indigentes y 14,1% son pobres no indigentes. (CASEN, 2003). De la Maza (2004) nos llama la atención, al señalarnos, que a pesar de lo significativo que puede parecer el avance, el porcentaje es todavía superior al obtenido 25 años antes, en 1973, cuando alcanzaba a un 17% de los chilenos.

¹⁰ Esto se puede verificar, en un dato muy actual, en junio de 2006 el Instituto Libertad y Desarrollo, realizó una encuesta, que da cuenta de aumento de la incertidumbre de los chilenos frente a la estabilidad de sus puestos de trabajo. Según el sondeo, 56% declara tener un temor alto (36%) y muy alto (20%) a perder su fuente laboral en los próximos meses.

propio régimen democrático. Entre ellas, sobresale la concentración de los procesos de toma de decisiones en las élites y cúpulas de los partidos, lo que significa necesariamente no ofrecer espacios para el debate y el florecimiento de la pluralidad, con lo cual “la sociedad pierde su carácter de proyecto, de modelamiento del presente en función del futuro y objeto de construcción colectiva.” (Moulian 2005:12)

En contraste con la lógica política que operaba en el país antes del autoritarismo (marcada fuertemente por la presencia de los partidos y una sociedad civil políticamente constituida) la dictadura y la imposición del neoliberalismo destruyó estas vías o mecanismos de integración social. El modelo de gobernabilidad¹¹ que se impone en Chile con el retorno a la democracia a principios de los noventa mantuvo los lineamientos esenciales del modelo económico y del orden constitucional puestos en práctica bajo la administración militar. Si bien, los mayores avances se han dado en el campo de las políticas sociales, puesto que se han incrementado ostensiblemente los recursos y se ha innovado en la implementación de algunos programas, el diseño de estas se corresponde con los límites del modelo, cuyas variables, como ya lo mencionamos, operan en la idea de disminuir el impacto de las demandas que se puedan levantar o que se dirijan hacia el Estado, ya que esto podría repolitizar la esfera pública y a su vez, desestabilizar la democracia¹². Es así, que se ha ido institucionalizando un espacio de intermediación despolitizada, que supone un disciplinamiento de las aspiraciones de la sociedad civil al camino diseñados por las elites.

4. El caso Argentino

Al igual que en el caso chileno la implementación del cambio de orden social no puede comprenderse sin referencia a la dictadura militar-cívica (1976-1983), allí se sentaron bases en cuanto disciplinamiento social y se ejecutaron los primeros atisbos fuertes de reestructuración social. No obstante, fue indudablemente la década del noventa la que significó para la Argentina la puesta en marcha de las políticas abiertamente neoliberales¹³, cuyas recetas fueron en gran parte seguidas por la administración de

¹¹ El discurso de la gobernabilidad que se desarrolla en Chile, es la vertiente más conservadora, y tiene su inspiración en S. Huntington: “Poca democracia permite consolidar la gobernabilidad; mucha, la desestabiliza”, Salazar, 1998.

¹² Ver Ducatzenzeiler, Graciela y Oxborn, Philip. 1994.

¹³ En el caso argentino factores internos y externos hicieron factibles la concreción de las reformas. Podemos enumerar algunos de estos procesos convergentes: a) la crisis económica de la segunda parte de los ochentas y las narrativas que se construyeron apuntando al modelo estado-céntrico nacional popular como causante de la debacle económica, b) el impacto de la hiperinflación en la subjetividad que funcionó como mecanismo de disciplinamiento social (Quiroga, 2000:44) y generó la posibilidad de privilegiar la estabilidad de los precios aún a costos altos a mediano plazo (Villarreal, 1996), c) la entrega del poder anticipado por parte de Alfonsín que fue aprovechada por la dirigencia del Partido Justicialista para obtener el compromiso de la futura oposición de prestar apoyo a las medidas de reformas, d) el capital político del peronismo (bases de apoyo, estructura política, formas de liderazgos) que instituyó un espacio de maniobras para implementar las políticas neoliberales (Grassi, 2003), e) la posibilidad de integrar a los sindicatos tradicionales fue un factor importante en la factibilidad de profundizar las reformas neoliberales, f) la particular coyuntura de los mercados internacionales a comienzos de la década del noventa que facilitaron la toma de créditos en el exterior alentada por las intervenciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Carlos Menem (1989-1999). El país así se convirtió en un ejemplo de las políticas impulsadas por los organismos internacionales. El nuevo modelo económico alcanzó inicialmente el control inflacionario y crecimiento económico. Esto, a su vez, redundó en el corto plazo en una mayor oferta de crédito interno y la recuperación del consumo doméstico. Asimismo, entre 1991 y 1994 la Argentina se vio favorecida por una masiva entrada de capitales externos motivada tanto por la orientación y la estabilidad de la política económica como por la particular situación del contexto internacional (Beccaria, 2001). No obstante, incluso en los momentos de estabilidad inflacionaria y crecimiento económico¹⁴ el modelo demostró limitaciones en los indicadores sociales, especialmente los ligados al mundo del trabajo (Lindenboim y Salvia, 2002:36). Incluso en períodos de crecimiento económico (1991-1994), el incremento en la creación de puestos evidenciado se vio contrarrestado con una ampliación de la oferta de trabajo (Cerrutti y Grimsón, 2004). Puede observarse, que ya en 1993 había una tendencia fuertemente alcista en la tasa de desocupación, ésta alcanzaba 9,6% y la de subocupación 9,1 % para el Gran Buenos Aires. Asimismo para 1994 y luego de 4 años de crecimiento económico a un promedio que rondaba el 8 por ciento anual, las tasas de desocupación se ubicaron en 13,1% (Gran Buenos Aires) mientras que la subocupación alcanzó 10,1%. Por su parte la crisis de fines de 1994 y principios de 1995 aceleró el decrecimiento del empleo formal llevándolo a niveles históricos (Beccaria, 2001 y 2002, Beccaria y Maurizio, 2004). La desocupación como la subocupación alcanzaron los niveles más altos de la década en 1996, con una tasa de desempleo abierto de 18,8% para el Gran Buenos Aires. A la vez que, a diferencia de períodos anteriores, las formas de autoempleo no alcanzaron para absorber la expulsión del mercado laboral. Es claro que el deterioro del mercado de trabajo no se refleja solamente en la tasa de desocupación. También es necesario observar el permanente aumento del subempleo horario en los años noventas, el alargamiento de la jornada laboral y el deterioro en la calidad de los empleos, aumento de informalidad e inestabilidad. (Lindenboim, 2002; Lindenboim y González, 2004: 3).

Es necesario notar que las elevadas tasas de desocupación impactaron directamente en el incremento de la pobreza y, por lo tanto, en las condiciones de vulnerabilidad social. La ampliación del desempleo de los años noventa fue un fenómeno generalizado. Sin embargo, los jóvenes y las mujeres se destacaron por el incremento en las tasas, así como también aumentaron los jefes de hogar desempleados (Beccaria, Altamir, y Rozales, 2002:61).

En general, las medidas que se implementaron para la adecuación del mercado de trabajo al nuevo modelo económico, ortodoxamente neoliberales, se pueden resumir en: la baja del costo laboral a partir de la reducción de los aportes patronales, rebaja de los costos de despidos y de protección laboral; la flexibilización de formas de contrato y despidos; y la descentralización de las formas de acordar los convenios colectivos (Roca, 2002:67). No obstante, los resultados que arrojaron fueron pésimos desempeños sociales: desprotección laboral, deterioro de la seguridad, impacto en la precarización de los puestos de trabajo y aumento de los niveles de desocupación.

¹⁴ En 1991 el crecimiento económico medido por el PIB fue de 9,9%, en 1992 de 8,9%, en 1993, 5,2% y en 1994 del 7,2%.

Por su parte, en el plano de las representaciones políticas una consecuencia del reordenamiento del mundo laboral fue la afección del sindicalismo. Esto porque los cambios en el mercado de trabajo y la nueva composición de la clase obrera pusieron a las organizaciones sindicales, históricamente monopólicas para procesar las demandas en el mundo laboral, frente a varios problemas. En primer lugar, la tradicional CGT vio afectada su capacidad de afiliación debido al aumento de la desocupación y la informalidad. Segundo, el viejo sindicalismo oficial sufrió una acentuada deslegitimación para representar los reclamos populares. Tercero, el efecto de disciplinamiento del desempleo (Lindenboim y Gonzalez, 2004:10) y las nuevas condiciones afectaron la huelga como repertorio de acción para importantes sectores de la clase trabajadora. La crisis de representación afectó a los sindicatos en general (Svampa y Pereyra, 2003:21) y produjo una mayor formación de liderazgos territoriales y comunitarios, algo que es especialmente relevante dado el proceso de reterritorialización que afectó a los trabajadores (Delfini y Picchetti, 2004). La distribución en el espacio de los sectores populares se vio afectada con la nueva condición del mundo del trabajo. La nueva territorialidad reordenó también importantes ámbitos de experiencia.

La experiencia del desempleo adquiere características especialmente relevantes tanto por su impacto tanto en la estructura de distribución del ingreso como en el plano subjetivo. El sujeto que se ve privado de un puesto de trabajo formal no sólo pierde el empleo y con ello la posibilidad de un salario, previsión social, acceso a la salud mediante obra social, vacaciones, sino que además ve alterada su forma de integrarse, su universo de sentidos sufre una abrupta transformación afectando casi todos los espacios de sociabilidad donde desarrolla lazos sociales y su inserción en la esfera pública (Beccaria, 2001; Delfini y Picchetti, 2004). A esto hay que sumarle los costos psicológicos e identitarios producto de la desestructuración y reestructuración fragmentada de los espacios de experiencia social. Es decir, los cambios no sólo afectan por el deterioro en los ingresos de los sectores asalariados, sino también implican un impacto en el plano simbólico en tanto afectan las estructuras que funcionan como contextos para la conformación de identidades (Palomino, 1995)

En síntesis, el neoliberalismo afectó, entre otros aspectos importantes, el desempeño del mercado de trabajo y alteró, así, la vida cotidiana de los asalariados erosionando las formas de acceso a seguridad y cobertura social que se asociaron tradicionalmente al puesto de trabajo formal. Por su parte, la reconfiguración del Estado impactó en las condiciones de vida de la población mercantilizando bienes públicos. Especialmente, la baja calidad de los servicios de salud y educación, producto de la orientación mercantil de los bienes públicos que se promovió desde el proyecto hegemónico, afectó fuertemente a los sectores subalternos. Los cambios en la estructuración de las clases sociales impactaron directamente en la subjetividad, la territorialización, las representaciones y las identidades sociales forjadas en el viejo modelo nacional-popular (Farinetti, 1998)

En este contexto es necesario analizar cómo las condiciones de sociabilidad afectaron la conformación de sujetos subalternos urbanos. En esta perspectiva presentamos a continuación la reconstrucción analítica de dos experiencias subalternas (los “pobladores” y los “piqueteros”) que condensan historicidad y aportan en la

comprensión de la profundidad de los cambios sociales operados por el neoliberalismo y su relación con la conformación de sujetos populares.

5. Los Pobladores chilenos

Cuando hablamos de poblaciones nos referimos a una categoría genérica utilizada para designar a los barrios pobres de las ciudades chilenas. Por consiguiente los habitantes de aquellos espacios reciben el apelativo de pobladores. Cualquier esfuerzo, por tratar de construir un perfil de los habitantes de las poblaciones debe partir asumiendo que el rasgo más sobresaliente de su composición es la heterogeneidad. El error que cometieron las modas intelectuales, que pretendieron dar cuenta del fenómeno de la pobreza urbana en los años 60 del siglo pasado, fue el de tratar de enmarcar a los pobladores dentro de categorías analíticas demasiado específicas y perdieron valor heurístico. La realidad de los pobladores chilenos no se ajustaba a la categoría de *marginal*, ni tampoco su experiencia vital se correspondía con un *polo marginal* o el *ejército industrial de reserva*, que son las propuestas conceptuales que se elaboraron.¹⁵

En este trabajo, proponemos entender a los pobladores, a partir de dos denominadores comunes. Primero, la ubicación desventajosa que ocupan en el espacio urbano, lo cual ocurre en la gran mayoría de los casos en donde están emplazados los barrios populares. Segundo, los pobladores se encuentran en una situación subordinada, son un sector dominado en el contexto de una determinada configuración social. (Baño, 2004)

En la historia reciente del país, digamos los últimos cuarenta años, los pobladores han jugado un papel significativo, emergiendo como sujeto social y ubicándose en el centro del conflicto político (Espinoza, 1993). En el periodo 1960-1973 caracterizado primero por la emergencia del reformismo demócrata cristiano y al calor del proyecto revolucionario de la *vía chilena al socialismo* promovido por la Unidad Popular después, desarrollaron numerosas ocupaciones de terreno, algunas de ellas de más de 15 mil familias, que al decir de algunos historiadores, significó una refundación de la ciudad de Santiago, a la par que dicho repertorio concurrió a la profundización de los procesos políticos sociales en los cuales estos ocurrieron. Para Castells (1973), la diferencia de las ocupaciones ilegales de terreno en Chile del resto de Latinoamérica, donde estas también tenían lugar, radica en el carácter estrictamente político que estas jugaron.

En los años ochenta, en un escenario caracterizado por una grave crisis económica, por el autoritarismo y la represión militar, y ante la ausencia de posibilidades de inclusión institucional, se gestó en las poblaciones una gigantesca red de organizaciones comunitarias, con el fin de otorgar soluciones a los diversos problemas

¹⁵ Para mayor comprensión de los conceptos en boga en aquellos años, remitirse a Quijano, Aníbal. 1966. *Notas sobre el concepto de marginalidad social*, CEPAL; Nun, José. 1969 *Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal*, en *Revista Latinoamericana de Sociología*, n° 5; DESAL Desarrollo Económico y Social de América Latina. 1969. *Marginalidad en América Latina. Un ensayo de diagnóstico*. Herder, Barcelona.

que los aquejaban. Así, se podía observar: ollas comunes, comedores infantiles, bolsas de cesantes, comités de comprando juntos y talleres culturales. Lo importante a destacar de estas dinámicas colectivas es el grado de autonomía que tenían y la constitución de un espacio de acción política (Oxhorn, 1991, 1995). En ese mismo escenario, de crisis y represión, se desarrollaron las protestas en contra de la dictadura¹⁶. En estas acciones, los pobladores jugaron un papel destacadísimo, incluso en muchas poblaciones se llegaron a gestar prácticas de guerrilla urbana. Pero, más allá del éxito o fracaso de estas acciones, lo que queremos reflejar es el indiscutible rol protagónico que tuvieron en la apertura del régimen y en la recuperación de la democracia.

Se hace necesario mencionar que en Chile durante la etapa del modelo de Estado Nacional Popular, la constitución y desarrollo de sujetos sociales siempre estuvo fuertemente asociada a la intervención de los partidos políticos, lo que hacía que las demandas de determinados actores se confundieran con los intereses de los partidos, de ahí que el repertorio de los sujetos populares coincidiera con las plataformas de los partidos de izquierda. Si bien, en los ochenta, el resurgimiento de la acción colectiva en la base social popular urbana no estuvo vinculada a los partidos políticos, los pobladores finalmente terminaron subordinándose a la estrategia de estos.

La llegada de la democracia en los años noventa implicó la consolidación del modelo neoliberal, y la puesta en práctica de una nueva dinámica de relacionamiento entre sistema de representación y base social. En este esquema, mantener los equilibrios macroeconómicos y asegurar los dispositivos institucionales de la democracia requería un control social eficaz, básicamente desactivar la demanda proveniente de los sectores populares por el potencial desestabilizador que podrían contener. Por otra parte, también es posible aducir como elementos desactivadores de la acción colectiva: cierto mejoramiento relativo de las condiciones materiales de los pobres urbanos, la cual puede asociarse al aumento de los recursos disponibles para política social y la institución de los circuitos diferenciados de consumo que ofrece el mercado. A partir de ese pequeño espacio de integración por la vía del consumo es que la esfera laboral ejerce un disciplinamiento social efectivo, puesto que la gente se ve dispuesta a aceptar trabajos precarios, mal remunerados, sin derechos, con largas jornadas laborales, a raíz de que viven bajo la amenaza latente del desempleo y la exclusión de ciertos mercados de consumo.

En términos generales, la esfera pública chilena se ha caracterizado por la invisibilidad de acciones colectivas de parte de los sectores populares urbanos¹⁷. Sólo la particular experiencia de los deudores de viviendas sociales, que puede considerarse uno de los más grandes movimientos populares que se ha desarrollado desde la recuperación de la democracia. Se nos hace interesante reflexionar en torno a ellos, ya que su expresión toma distancia de las antiguas lógicas de movilización, además de que su capacidad de conformar, amalgamar y dirigir demandas refleja, en alguna medida, los

¹⁶ Se llamó protestas a distintos llamados a movilización, las cuales iban desde pequeños actos de desobediencia civil a acciones de enfrentamiento directo con las fuerzas represivas, estas coparon la esfera pública, entre los años 1983 al 1986.

¹⁷ Aunque podemos mencionar dos masivas tomas de terreno que ocurrieron en la comuna de Peñalolén.

códigos impuestos por el neoliberalismo.

El origen del movimiento se asocia indisolublemente a la política de vivienda. En 1990 cuando asume el gobierno democrático, uno de los temas más urgentes a solucionar era el déficit habitacional, el cual se calculaba en alrededor de 900 mil viviendas¹⁸. Esta situación inquietaba a los gobernantes por temor a que se politizará y volvieran a ocurrir ocupaciones ilegales como en la década de 1960, lo que ocasionaría verdaderos problemas a la naciente democracia. Por ello, el desafío pasaba por actuar rápido focalizando los recursos hacia una atención prioritaria de los sectores pobres de las ciudades. La solución propuesta fue un financiamiento compuesto por el ahorro del postulante, un subsidio estatal y un mutuo hipotecario, lo que dejaba al beneficiado con una deuda financiera. El responsable de la implementación de la vivienda básica, sería el SERVIU¹⁹, de ahí que a los deudores se les denomine deudores Serviu.

Se puede poner como momento de inicio del movimiento noviembre del año 2000, cuando un grupo de pobladores se agrupa en torno a la propuesta de impulsar el pago de un *“dividendo de pobre de 10.000 pesos”*²⁰. Esto surge frente a la imposibilidad de poder pagar la cuota que les corresponde, y con esa acción hacen un reconocimiento público de la deuda con lo cual evitan el desalojo y que sus casas sean rematadas. Esta convocatoria, tuvo una acogida mayoritaria, así miles de pobladores concurrían en el mismo día y en un mismo horario a la oficina del Serviu que se encuentra en el centro de la ciudad de Santiago, con el objetivo además, de causar un efecto político con su acción al instalarlo en el espacio público.

La creación de una nueva política de vivienda también contribuye a la masificación del movimiento. Dada la cantidad considerable de deudores, 262 mil, desde el gobierno se pone en práctica el Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda. Esta situación incrementa la plataforma de demanda de los deudores. Su propuesta busca que el gobierno responda con “equidad en el trato hacia los pobres”, puesto que gran cantidad de personas, por haber postulado unos años antes, quedaron excluidos de este beneficio.

La característica del movimiento de deudores, es que no posee la estructura clásica de la organización; no existen jerarquías dirigenciales, todas las decisiones se toman en asambleas horizontales, cuentan con representantes en prácticamente de todas las comunas de la Región Metropolitana, además de otros comités del resto del país, gozan de una clara autonomía y de un abierto rechazo a intervenciones externas, principalmente de los partidos políticos. Su repertorio de acción ha sido variado, han recreado las antiguas formas de lucha de los sectores populares, como las barricadas en los barrios, el corte de carretera, marchas en el centro de la ciudad, huelgas de hambre, y otras un poco más novedosas como la ocupación de edificios

¹⁸ Según estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional, MIDEPLAN (1998)

¹⁹ Vivienda Básica es el nombre que recibe la solución habitacional. Servicio de Vivienda y Urbanización-SERVIU- es una instancia desconcentrada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que opera a nivel regional. Por otro lado, la calidad del producto producido ha sido constantemente muy mal evaluada, se produjeron casas de calidad muy deficiente, de 32 mts² para un promedio de 4.5 personas lo que obviamente, produce condiciones de hacinamiento. Además de acrecentar el fenómeno de gueto de la pobreza urbana.

²⁰ 10 mil pesos chilenos corresponde a 20 dólares estadounidenses, aproximadamente.

de instituciones públicas y políticas, colgarse de señaléticas del tránsito o subirse a estructuras en construcción, han sido sus acciones más osadas.

La posición del gobierno ha sido bastante ambigua frente al fenómeno, si es que no abiertamente contraria a la movilización. Si bien desde el Ministerio se han abierto espacios de diálogo, se han elaborado mesas de trabajo en conjunto. Por otro lado persiste la posición de deslegitimar e invisibilizar a los deudores frente a la opinión pública, y de presentar propuestas de solución como una situación aislada, de iniciativa propia del ejecutivo, más que como respuestas a una negociación colectiva, que efectivamente se ha venido sosteniendo. Esta situación, a nuestro juicio va en desmedro del fortalecimiento de actores, que entre otras cosas debiera ser una de las prioridades de la política social, ya que la integración efectiva pasa por la capacidad que tengan los sujetos sociales de alterar patrones de integración del poder y las decisiones.

Lo importante del movimiento, más allá de lo cortoplacista y economicista de su demanda, es que ha permitido el reencuentro de lo popular, la búsqueda por la constitución de una identidad subalterna, que los lleva a plantearse otros objetivos, *“nuestra meta siempre ha sido la vivienda y un poquito más”*, como los temas de salud, educación, temas relacionados al entorno urbano, el trabajo. Una cuestión relevante es que han puesto en el centro del debate la forma técnica en la cual opera la política social, han criticado la asignación de subsidios y entrega de beneficios de parte del gobierno, como una manera que busca dividir y atomizar a los pobladores y a las clases populares en su conjunto, a través de clasificaciones de indigente, pobre o no pobre, tratando de encuadrarlos en categorías diferentes, cuando ellos asumen que su situación es idéntica.

6. Los “Piqueteros”

Los niveles de desocupación alcanzados por la Argentina de los años noventa hicieron que el tema del “trabajo” se colocara en la agenda de diversos actores sociales. El gobierno nacional ofreció respuestas del manual neoliberal ante la situación: insistió en la necesidad de hacer las relaciones laborales más flexibles a la vez que remitía al ámbito individual la responsabilidad por permanecer sin empleo. En lo que concierne a políticas públicas se instrumentaron subsidios focalizados temporales tendientes a atender la situación devenida de las masivas quiebras en la industria nacional.

La situación de hiperdesempleo funcionó a su vez como mecanismo disciplinador en lo que respecta a la conflictividad del sector ocupado. El miedo a la pérdida del empleo y el deterioro en las condiciones laborales afectaron las formas de luchas gremiales, a la vez que el sindicalismo corporativo pactaba el resguardo de ciertos privilegios a cambio de una nula acción beligerante. En este marco, y en el contexto de deterioro, desafiliación y cambio abrupto en las condiciones de sociabilidad emergieron respuestas colectivas que fueron creciendo con el correr de la década. Tal vez de las más sorprendentes fueron las protagonizadas por los desocupados,

conocidos gracias a la mediación de la prensa masiva como “piqueteros”.

En rigor de verdad los primeros cortes de rutas²¹ (los “piquetes”) como forma de protesta surgieron en el mes de junio de 1996 en la localidad de Cutral Co, provincia de Neuquén. Allí esta población (junto a su vecina Plaza Huincul) que había sido testigo de los beneficios del Estado de Bienestar por estar en un enclave petrolero y cuya economía regional se regía por la presencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se manifestó disruptivamente cuando las consecuencias de la privatización de YPF se hicieron notar (desempleo masivo, baja de salarios, subcontratismo). Aprovechando fisuras en las elites dominantes en la provincia y poniendo al servicio de la protesta todos los saberes de aquellos que habían tenido sólidas experiencias gremiales en el seno del sindicato de petroleros, los ciudadanos de estos pueblos de alrededor de cuarenta mil habitantes, iniciaron una protesta originalmente motivada por el anuncio oficial de la cancelación de la radicación de una planta de fertilizantes (Auyero, 2002). La reconversión de la actividad económica hacia otros rubros productivos había sido uno de los incentivos que el gobierno había utilizado para convencer a la población que la privatización de YPF sería beneficiosa para a región. Frente al incumplimiento de estas promesas, los habitantes desnudaron la cara oculta a nivel nacional de una situación de deterioro de las economías regionales. El corte de rutas, que originalmente agrupó a maestros, ex obreros, pequeños comerciantes, propietarios de tierras se popularizó como “piquete” y de allí el nombre “piqueteros”. No obstante, faltó tiempo para que piqueteros se asocie en el lenguaje de la política argentina a “trabajador desocupado” puesto que si bien en las protestas del interior del país participaron desempleados, éstos no eran la mayoría ni los más organizados.

Lo que comúnmente se denomina como organizaciones “piqueteras”, es decir, compuestas por desocupados, se ubican principalmente en el conurbano de Buenos Aires, en los ex enclaves industriales del país. Allí, la gran desocupación no se había traducido en acciones colectivas masivas, debido a lo que se explicó en su momento de la función disciplinadora del desempleo y las dificultades del sindicalismo clásico para procesar la nueva demanda popular. No obstante, en las nuevas condiciones de sociabilidad impuestas por el orden neoliberal, existió en Argentina una experiencia particular de movilización social de los sectores populares urbanos: los piqueteros o, con mayor propiedad, el movimiento de trabajadores desocupados. Como había sucedido con otras experiencias latinoamericanas (como los pobladores chilenos) la emergencia de un movimiento de desempleados puso en jaque las explicaciones sociológicas clásicas, algo que motivó una proliferación de miradas sobre el fenómeno desde su consideración de marginales lumpemplotarios hasta el germen de un sujeto emancipatorio.

A nuestro entender pueden resumirse en cuatro los factores que influyeron en la construcción del movimiento de desocupados. Primero, la existencia de experiencias y redes previas inscriptas en los territorios populares, antes barrios obreros y ahora de desempleados. Las experiencias políticas previas provinieron de dos frentes: Por un

²¹ Es evidente que el uso de la obstrucción de caminos como forma de protesta no es original, la barricada es una manera bien conocida de beligerancia, no obstante su uso sistemático es lo que dio el nombre de “piqueteros”.

lado las tomas de tierras y formación de asentamientos en el conurbano en la década del ochenta que motivaron una oleada de luchas por el derecho a la vivienda y condiciones de hábitat, algo similares a las acciones de los pobladores chilenos. Estas experiencias generaron organizaciones de base (Juntas de Fomento, Cooperativas, Centros Comunitarios), que fueron los saldos organizativos de acciones colectivas acotadas geográficamente, pero de gran valor para el imaginario de quienes participaron. Por otro lado, pero ligado a lo anterior, existieron en los territorios mencionados diversos grupos de militantes sociales de diferentes extracciones ideológicas (peronistas, guevaristas, cristianos, maoístas) que con diferentes grados de organicidad a estructuras políticas formales se ocuparon de fomentar formas de organización popular de base. Ambas experiencias que se mantuvieron latentes durante muchos años de la década del noventa, fueron los soportes de la movilización de los desempleados cuando la situación de desempleo se expandió hasta rebasar las redes clientelares de contención. Es decir, estas experiencias fueron exitosas al procesar (y en parte conformar) la demanda de los desocupados y dirigir la acción colectiva aprovechando su capital político. Otro ámbito fundamental dentro de este primer eje se corresponde con la importancia de las redes sumergidas en la vida cotidiana, que permitieron consolidar lazos de solidaridad entre los participantes y enfrentar, colectivamente, las nuevas condiciones sociales bajo el neoliberalismo.

El segundo factor que identificamos es la densidad semántica del “trabajo” en Argentina. En efecto, uno de los pilares del modelo nacional-popular argentino fue la idea de pleno empleo y que el trabajo era tanto un deber como un derecho garantizado por la Constitución. El neoliberalismo introdujo una disputa en este sentido del trabajo, en particular alejándolo del sintagma de los derechos y asociándolo al interés individual. Esto se traduce en que bajo los sentidos hegemónicos la situación de desempleo era responsabilidad individual, mientras que bajo la semántica nacional-popular el trabajo era, también, un derecho. La posibilidad de sentirse como dañado (Ranciere, 1996) por permanecer sin empleo, esto es, de construir una demanda por trabajo se asocia a la permanencia de ciertos sentidos colectivos populares que no pudieron ser arrasados por la gran maquinaria neoliberal. Esta demanda sentida subjetivamente como un daño se articuló con las experiencias previas y las redes para constituir el recamo de los desocupados: “trabajo digno”.

El tercer factor que en el caso argentino alentó la participación de desocupados en las movilizaciones fue la puesta en práctica de las políticas públicas focalizadas financiadas por organismos como el Banco Mundial y alentadas por el Fondo Monetario Internacional. En efecto, frente a las movilizaciones de miles de desocupados que pedían por “trabajo” y la imposibilidad del gobierno de satisfacer esa demanda, las elites dispusieron de esos recursos para negociar el levantamiento de los cortes de ruta que los desocupados del conurbano habían adoptado de las primeras movilizaciones del interior del país. Así, se dispusieron cada vez más recursos asistenciales para desactivar la protesta lo que lograba un efecto contradictorio: diluía la manifestación pero otorgaba recursos y expectativas de éxito a los que participaban en acciones colectivas. Las organizaciones de desocupados lograron ser gestoras de la ayuda social y administrar recursos provenientes del Estado. Esto puso en marcha experiencias que superaron la

búsqueda de salvar la situación de verse privados de ingresos al constituir una experiencia colectiva identitaria propia de un movimiento social reivindicativo.

Cuarto, la dislocación del orden social neoliberal y su pésimo desempeño en Argentina en cuanto indicadores sociales generaron brechas en el discurso hegemónico que no pudo explicar como de la promesa de ingreso al “Primer Mundo” se había transformado en una catástrofe social. Esto promovió mejores espacios de receptividad y solidaridad para las protestas de los desocupados que se presentaron en la esfera pública como las principales víctimas de un experimento neoliberal que hizo estallar la matriz clásica de integración social argentina.

7. Conclusiones

Los procesos de implementación de las políticas neoliberales en los países estudiados no se comprenden sin una referencia a las dictaduras militares. En Chile porque fue el régimen de Pinochet quién sentó las bases y desarrollo la reestructuración social y política, en Argentina, porque la dictadura preparó el terreno y realizó los primeros ajustes de orientación neoliberal. No obstante, el proceso chileno es anterior al argentino en cuanto las principales afectaciones de la reestructuración neoliberal ocurren a principios de los años ochenta. Frente a ellas se registran protestas en el contexto de una fuerte crisis económica. La institucionalización y legitimación del modelo, por su parte, ocurre en los años noventa en el espacio de la transición democrática en un contexto de invisibilidad y retracción de las acciones de protesta. En Argentina, la recuperación de la democracia en 1983 significó un intento de congeniar bienestar socio-económico y democracia política, no obstante el fracaso del gobierno de Alfonsín (1983-1999), jaqueado por las presiones internacionales y la beligerancia sindical, ofreció los pilares para la instauración en los noventa del régimen neoliberal. Este al principio mostró un período de fuerte consenso hegemónico pero hacia mediados de la década comenzó a mostrar grietas que se llenaron de protestas.

De este modo es claro que la década del noventa se inició, para ambos países, un proceso de profundización (para el caso de Chile), implementación (para el caso argentino) y de legitimación del nuevo orden social en ambos países bajo regímenes democráticos. En este marco de hegemonía neoliberal, en una situación mundial marcada por la caída del mundo bipolar y la instauración del pensamiento único, es importante observar el retraimiento de la posibilidades de acción colectiva de los sectores populares urbanos de los dos países, quienes habían tenido en la lucha por los terrenos y la vivienda uno de los puntos de mayor conflictividad en su historia.

En efecto, en la primera mitad de los años noventa encontramos tanto en Argentina como en Chile una característica similar: dificultades para el accionar colectivo popular que exprese las demandas sociales y se oriente a una disputa por el horizonte histórico. El crecimiento económico sostenido por ambos países a comienzos de la década se articuló con un discurso hegemónico tendiente a justificar el orden social. En Chile la acción focalizada de la política social funcionó sino para contrarrestar los efectos negativos de la reestructuración al menos para disciplinar a los

otrora ciudadanos y ahora “beneficiarios”. Por su parte la existencia de un sistema de partidos, bastante fuerte con una imbricación con la sociedad muy estrecha, permitió que la fracción hegemónica de éste, permitiera disciplinar al conjunto social, en torno al consenso neoliberal. En Argentina si bien la acción focalizada fue menor, cobraron mayor importancia las redes clientelares y el llamado “gasto social” se dirigió a disolver nodos de conflicto a la par que se reestructuraban con orientación mercantil servicios como salud y educación. Por su parte, fueron los sindicatos clásicos los que brindaron insumos para el consenso neoliberal desalentando la acción colectiva de protesta, aunque también es cierto que en la primera parte de la década las mayores protestas las desplegaron los sindicatos combativos provenientes del sector público que conformaron la Central de Trabajadores Argentinos como alternativa a la tradicional Confederación General del Trabajo.

El modelo de dominación tuvo, especialmente en la segunda parte de la década pasada, un mayor ajuste (eficacia hegemónica) en Chile que en Argentina. Mientras las formas de implantación de las políticas sociales focalizadas de inspiración neoliberal produjeron en Chile una atomización y división de los pobladores, en Argentina esos dispositivos fueron invertidos y utilizados como recursos para alimentar una experiencia colectiva urbana popular que superó en visibilidad y relevancia política a la antigua experiencia de las tomas de tierras. Mientras en Chile sólo la emergencia del movimiento de deudores se puede relevar como un paso en la reconstitución del tejido social popular y de denuncia a la política social por su lógica de atomización y disgregación social. No obstante, aún están muy lejos de una perspectiva que los piense como sujetos sociales contrahegemónicos, y su proyecto no contiene una crítica al modelo causante de su situación, más bien la inequidad y la injusticia social se ven como un problema de eficiencia gubernamental y el modelo neoliberal se asume como una cuestión casi natural. Es decir, la demanda si bien cuestiona las consecuencias de la mercantilización de la vida, no impugna las causas del proceso social. Por su parte en Argentina los desocupados alcanzaron niveles de organización y de beligerancia que, si bien no proyectaron alternativas autónomas al modelo neoliberal, sí promovieron su impugnación, puesto que fue el “neoliberalismo” ese significativo que aglutinó las protestas de los desocupados. La demanda por “trabajo” (y en particular adjetivado por “digno”) orientado hacia el gobierno nacional exigiendo la intervención del Estado (subsidios universales, salud y educación pública) es una muestra de la impugnación al ordenamiento neoliberal que estos actores promovieron y sin el cuál es imposible comprender el proceso histórico-político actual en Argentina.

Las respuestas frente a la hegemonía neoliberal nos indica varias cuestiones. Primero, los aspectos estructurales en que se desarrollan experiencias colectivas, si bien son de suma relevancia no agotan la comprensión de los fenómenos de movilización social. Segundo, para un abordaje de las respuestas colectivas hay que indagar en la historicidad propia de los grupos movilizados. Tercero, la indagación de la génesis histórica debe complementarse con un estudio de los procesos de construcción de sentidos que sobre una coyuntura elaboran los sujetos sociales. De esta manera será posible identificar sentidos que instalen umbrales para la acción colectiva y habrá otros que las inhiban. Cuarto, y ligado a lo anterior, dar cuenta de los aspectos hegemónicos del orden

social (naturalización de sentidos, construcción de sentidos comunes y subjetividades sociales) es una clave para indagar en la posibilidad de emergencia de movimientos sociales, sus alcances y sus límites. Quinto, analizar los aspectos del sistema político, en tanto su historicidad como su productividad de relaciones sociales permitirá identificar aspectos que ayuden a comprender el accionar de los actores. Sexto, el análisis de los proyectos que elaboran los sujetos sociales es una clave para indagar su capacidad de impugnar un orden social y generar dislocaciones dónde emerjan.

Todos estos puntos deben ser considerados para el estudio de las movilizaciones de los sectores populares urbanos. Con estos elementos es posible pensar como frente a dos contextos con bases análogas se produjeron respuestas colectivas disímiles y esto influye en el proceso histórico que se transita actualmente en ambos países. El estudio de los sujetos populares evidencia así ser una entrada importante para analizar los momentos políticos de los países, y aún más; son esos sujetos los que con diferentes éxitos disputan por el orden social. En sus avatares del presente pueden hallarse huellas del futuro, potencialidades y limitaciones para la construcción de órdenes sociales alternativos al neoliberal, basados en democracia y justicia social.

Bibliografía

- Altamir, Oscar, Beccaria, Luis y Gonzalez Rozada, Martín (2002). “La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000”. *Revista de la CEPAL*, Núm. 78. pp. 55-86
- Auyero, Javier. (2002b). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Barrera, Manuel (1999). Political Participation and Social Exclusion of the Popular Sectors in Chile, pp. 81-102. In Contributor and Co-editor with Philip Oxhorn and Pamela Starr, eds., *Markets and Democracy in Latin America: Conflict or Convergence?* Boulder, Colo.: Lynne Rienner,
- Barrera, Manuel. (2001). ¿El empleo/desempleo principal (des)articulador social?, presentado en la Conferencia de la Latin American Studies Association, LASA, Washington DC, 6 al 8 de septiembre.
- Beccaria Luis y Maurizio, Roxana (2004). “Inestabilidad laboral en el Gran Buenos Aires”. *El Trimestre Económico*, Vol. LXXI (3) Núm. 283 Julio-Septiembre, pp. 535-573
- Beccaria, Luis (2001) Empleo e integración social. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Cavarozzi, Marcelo (1996). *El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina*, Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- Cerrutti, Marcela y Gimsón, Alejandro (2004). “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”. The Center for Migration and Developmet Working Paper Series, Paper #04-04d. En: <http://cmd.princeton.edu/papers/wp0404d.pdf> (Fecha de consulta: 10 de Mayo de 2010)
- Contreras, Rodrigo (2003). La larga, tortuosa y nunca acabada construcción del Estado liberal en América Latina. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Biblioteca Ideas, Tema 4: Instituciones y Desarrollo, nº 122.
- Cowan, Kevin, et al. (2004). Un diagnóstico del desempleo en Chile. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, agosto. En: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35154186> (Fecha de consulta: 20 de Abril de 2010).
- De la Maza, Gonzalo. (2004). “Políticas públicas y sociedad civil en Chile: el caso de las políticas sociales (1990-2004)”. *Revista Política* nº 43, pp. 105-148.
- Delfini, Marcelo y Pichetti, Valentina (2004). De la fábrica al barrio y del barrio a las calles. Desempleo y construcción de identidades en los sectores populares desocupados del conurbano bonaerense, pp. 269-290. En Battistini (comp.) (2004). *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores*. Buenos Aires: Prometeo.
- Díaz, Álvaro, (1991). “Nuevas tendencias en la estructura social chilena. Asalarización informal y pobreza en los ochenta”. *Revista Proposiciones*, nº 20, pp. 88-119.
- Farinetti, Marina, (1998). “Cultura peronista y política peronista en los

noventa”. *Apuntes de Investigación del CECYP*, 2/3. pp. 177-188.

Garretón, Manuel Antonio. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. Documento CEPAL, Serie políticas sociales, n° 56. Santiago, Chile.

Grassi, Estela (2003). *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame*. Tomo I, Buenos Aires: Espacio.

Instituto Libertad y Desarrollo (2006). Encuesta de Percepción del Desempleo. En: <http://www.lyd.com/lyd/index.aspx?channel=4243> (Fecha de Consulta: 30 de Marzo de 2010).

Lechner, Norbert (1998). “Nuestro miedos”. *Perfiles Latinoamericanos*, n° 13, 179-198.

Lindenboim, Javier (2002). El mercado de trabajo en la Argentina de la transición secular. En Lindenboim y Danani (coords.) (2002). *Entre el trabajo y la política*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Lindenboim, Javier y Mariana Gonzalez (2004). “El neoliberalismo al rojo vivo: mercado de trabajo en Argentina”. *Cuaderno del Ceped* N° 8, pp. 27-48.

Lindenboim, Javier y Salcia, Agustín (2002). “Cada vez menos y peores empleos. Dinámica laboral en el sistema urbano de los noventa”. *Cuadernos del CEPED*, Núm. 7, pp. 29-64.

Meller, Patricio (1999). Pobreza y distribución del ingreso en Chile. (Década de los noventa), pp. 41-64. En Drake, Paul y Jaksic, Iván. (compiladores) (1999). *El Modelo Chileno, Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

Ministerio de Planificación, Gobierno de Chile. (2003). Encuesta de Caracterización Socioeconómica. CASEN.

Moulian, Tomas (2005) “*De la política letrada a la política analfabeta. La Crisis de la Política en el Chile Actual y el “Lavinismo*”. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Oxhorn, Philip (2001a). “When democracy isn’t all that democratic : Social exclusion and the limits of the public sphere in Latin America”. *North-South Agenda Papers*, n° 44. Published by the University of Miami.

_____ (2001b) Desigualdad social, sociedad civil y los límites de la ciudadanía en América Latina. *Revista Economía, Sociedad y Territorio*, vol. 3 n° 9, pp. 153-195.

_____ (1995). *Organizing Civil Society. The popular sectors and the struggle for democracy in Chile*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

_____ (1991). “The popular sector response to an Authoritarian Regimen: Shantytown Organizations since the Militar Coup”. *Latin American Perspectives*, vol 18, n° 1, pp. 66-91.

Palomino, Héctor (1995). Quiebres y rupturas de la acción sindical: un panorama desde el presente sobre la evaluación del movimiento sindical en Argentina, pp. 203-230. En Acuña (comp.) (1995). *La nueva matriz sociopolítica Argentina*. Buenos Aires: Nueva visión.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). *Informe de Desarrollo Humano en Chile: las paradojas de la modernización*. Santiago: PNUD.

Quiroga, Ana (2005) “Un horizonte de Amenazas”. En AA.VV (2005). *Trabajo e identidad ante la invasión globalizadora*. Buenos Aires: Ediciones Cinco/La Marea.

Ranciere, Jacques (1996). *El desacuerdo. Filosofía y Política*. Buenos Aires: Nueva Visión. .

Schild Verónica. (1998). New Subjects of Rights? Women’s Movements and the Construction of Citizenship in the New Democracies. In Álvarez, Sonia; Dagnino Evelina, and Escobar, Arturo (eds) (1998). *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*. Boulder, Colo.: Westview Press.

Svampa, Maristella y Pereyra Sebastián. (2003). *Entre la ruta y el barrio*. Buenos Aires: Biblos.

Villarreal, Juan (1996). *La exclusión social*. Buenos Aires: Norma-FLACSO.

Wormald, Guillermo y Sabatini Francisco. 2003. *El impacto del nuevo modelo de orientación neoliberal sobre las oportunidades de integración social en el ámbito urbano: Chile 1980-2000*. Documento preparado para el Center for the Study of Urbanization and Internal Migration in Developing Countries, The University of Texas, Working paper n° 2, Uruguay, Montevideo. En: <http://www.prc.utexas.edu/urbancenter/documents/Chilefinal.pdf> (Fecha de consulta: 01 de Junio de 2010)

Wormald, Guillermo, Cereceda, Luz y Ugalde, Pamela (2002). Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: los grupos pobres de la región Metropolitana de Santiago de Chile en los años noventa. En Kaztman, Rubén y Wormald, Guillermo, (Coordinadores) (2002). *Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Uruguay: Cebsa Comunicación Visual.